

1311-D-01

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...

Artículo 1º – Declarar monumento histórico nacional y tumba de guerra, a los restos del buque de la República Argentina Crucero A.R.A. “General Belgrano” y de los trescientos veintitrés (323) tripulantes que allí reposan, hundido en combate el 2 de mayo de 1982 en la zona económica exclusiva.

Art. 2º – Disponer las medidas que aseguren que los restos de los tripulantes que allí yacen no sean perturbados. Se aplicará idénticas medidas respecto de los restos materiales en relación a su posible remoción o alteración por acciones que se dispusieran en el futuro. Solamente bajo los organismos de aplicación y control pertinentes se permitirán acciones en el marco de la reglamentación que lo autorice expresamente.

Art. 3º – Solicitar al Poder Ejecutivo que instruya al Ministerio de Defensa para incorporar en las cartas náuticas la mención de este monumento.

Art. 4º – Encomendar al Poder Ejecutivo nacional que a través de los organismos pertinentes efectúe la notificación de la presente ley en el ámbito internacional.

Art. 5º – La autoridad de aplicación, dispuesta a futuro por el Poder Ejecutivo, será quien aplicará la reglamentación de la presente ley.

Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Alejandra B. Oviedo. – Jorge L. Bucco. – Ovidio Zúñiga. – Ricardo C. Quintela. – Adrián Menem. – Juan M. Urtubey.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El hundimiento del Crucero A.R.A. “General Belgrano” durante el conflicto por la recuperación de nuestras islas Malvinas, tiene características épicas y significado histórico por la causa que lo motivó, por la magnitud material de su porte, por la cantidad de víctimas que quedaron en él y por las circunstancias adversas que vivieron los sobrevivientes hasta ser rescatados.

El Crucero A.R.A. “General Belgrano” está hundido en aguas de nuestro litoral, dentro de las 200 millas de la zona económica exclusiva, pero más allá de la 12 millas de aguas territoriales que asegurarían su intangibilidad. La profundidad a la que se encuentra no constituye garantía suficiente para evitar que pueda caer en manos de exploradores o aventureros interesados.

Es de público conocimiento que se han desarrollado en el mundo, con una gran vorágine, exploraciones de restos arqueológicos y en particular submarinos. Esta actividad genera para quienes la emprenden tan importantes beneficios económicos que en ocasiones, y a falta de un adecuado control, se pone en riesgo el bien cultural e histórico a preservar.

La República Argentina no tiene legislación que proteja sus buques o aeronaves de Estado caídos en acción del servicio o de guerra –como es este caso– y con los restos mortales de quienes los tripularon que yacen allí.

En señal de reconocimiento hacia esas víctimas de guerra, muchas naciones importantes del mundo han creado la figura de “tumba de guerra y monumento histórico”, para proteger el bien histórico y respetar los restos mortales de sus tripulantes. En este sentido la Unión Británica, en el marco de la ley de “Protección de restos militares”, contempla como “sitios controlados” las ubicaciones de las naves hundidas en combate durante una guerra. De esta manera brinda una protección jurídica al acorazado “Prince of Wales” y el crucero de batalla “Repulse”, hundidos por la aviación naval japonesa en el año 1941, que han sido objeto de

diversos relevamientos e inspecciones. En consecuencia el gobierno británico los considera propiedad de la Corona y tumba oficial de guerra para todos los hombres que murieron en esas naves, según consta en la publicación “Battleship” de Martín Middlebrook & Patrick Mahoney, edición 1977 y en el Boletín Oficial del Centro Naval N° 800 del mes de diciembre del año 2000, páginas 841 y 842.

Por ello y en atención de los antecedentes de las medidas que otros países han adoptado para proteger los restos de sus embarcaciones hundidas en actos de guerra y de los tripulantes que allí entregaron sus vidas por su patria, es que considero la necesidad de que nuestro cuerpo legislativo haga un expreso e innovador reconocimiento a nuestro Crucero A.R.A. “General Belgrano” y a los héroes que allí yacen mediante esta ley.

Los restos de naufragios de buques y aeronaves del Estado argentino son de su exclusiva propiedad por ley y aunque aparentemente abandonados no lo son y permanecen bajo su control hasta que un acto administrativo los convierte en rezagos.

La custodia y la propiedad del pecio, es decir restos del naufragio, por parte de la Armada Argentina y a través de ella del Estado nacional, se encuentra basada en las normas sobre el patrimonio del Estado contenidas en la Constitución Nacional, la Ley Marítima Internacional y los artículos 95 y 96 de la Convención del Derecho del Mar.

Según estas leyes, los títulos, derechos y certificados de propiedad no se pierden por el mero transcurso del tiempo, sólo el Honorable Congreso de la Nación podría permitir renunciar a tal derecho, que reconoce nuestra legislación pero también la ley internacional.

Ante la falta de legislación específica, los gobiernos de Francia, Alemania, Japón, la Federación Rusa, Gran Bretaña y los Estados Unidos celebraron un acuerdo de partes en el mes septiembre de 1995, según el cual se acredita la propiedad de un naufragio al Estado de bandera. Esta declaración prevé que el salvataje o intento de salvataje del pecio está prohibido cualquiera sea su ubicación sin la autorización del Estado de bandera. Si el pecio se halla en el mar territorial o en la zona contigua, el Estado costero solamente ejerce, por su jurisdicción, el control del acceso al pecio. Claro ejemplo de la aplicación de este acuerdo multilateral se registró con las exploraciones llevadas a cabo en el buque “CSS Alabama” efectuadas bajo las leyes de la República de Francia. Este buque, propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica, fue hundido durante la Guerra de la Secesión frente a las costas francesas.

Por todo lo expuesto precedentemente es que solicito a los señores diputados nacionales me acompañen en esta iniciativa.

Alejandra B. Oviedo. – Jorge L. Bucco. – Ovidio Zúñiga. – Ricardo C. Quintela. – Adrián Menem. – Juan M. Urtubey.

–A las comisiones de Defensa Nacional y de Cultura.